



SIN INJERENCIA DEL ESTADO LOS TRABAJADORES DEBEN DECIDIR SU PROPIA POLÍTICA

La concentración obrera convocada por el sindicato de camioneros en la Plaza de Mayo y el discurso de Moyano terminaron de consolidar la línea de ruptura de una fracción del movimiento sindical con el gobierno. Frente a una concurrencia masiva, el secretario general de la CGT, además de reclamar la elevación del tope al mínimo no imponible en el impuesto al salario así como el techo a las asignaciones familiares, y de descalificar la presión gubernamental sobre las paritarias, le imputó al régimen kirchnerista no haber terminado con el hambre en Argentina, pese a la tendencia favorable que se prolongó a lo largo de los últimos nueve años; denunció el contenido reaccionario de calificar de extorsivas o destituyentes las reivindicaciones de los trabajadores, y le recordó al matrimonio presidencial su historial de negocios en época de la dictadura.

Es un hecho que el gobierno no tiene respuesta ante las legítimas demandas de los asalariados. Lo único que ha atinado a decir Cristina Fernández, luego de prolongadas semanas de silencio oficial sobre el asunto, es que el impuesto al salario sólo lo paga 19% de los trabajadores que están en blanco, y advirtió que, como en 2009, el gobierno se propone cuidar la caja. Al parecer, la pequeña burguesía kirchnerista ha llegado al convencimiento de que entre las



bondades del “modelo productivo” figura la creación, nada menos, que de una aristocracia obrera. Por supuesto, la presidenta nada dijo del congelamiento del techo de las asignaciones familiares que cada vez cobran menos trabajadores, y mucho menos de la pretensión oficial de fijar los convenios salariales por debajo de la inflación.

“Cuidar la caja” para el gobierno significa, entre otras cosas, consolidar el ajuste que le ha tocado a una parte de los asalariados y mantener fuera del alcance del fisco el territorio sacrosanto de la especulación finan-

ciera: razón más que suficiente para intentar desplazar a la actual dirección de la CGT, en especial a Moyano que hace ya tiempo se había convertido en un aliado demasiado ambicioso y difícil de manejar. Desde ya que, para el gobierno, el cambio de guardia que promueve en la central obrera no tiene nada que ver con la democracia sindical. Esto se lo señaló Moyano al ministro de Trabajo, al restarle autoridad moral para juzgarlo y recordarle los fraudes que la cartera laboral había convalidado en los sindicatos, además de denunciar que en esa cartera existen más de 3.000 “contratos basura”.

El objetivo del kirchnerismo es aplastar el foco de resistencia obrera que ha surgido en la CGT. Con ese propósito, los funcionarios del gobierno trabajan tiempo completo intentando quebrar el bloque sindical del camionero y sumar tráfugas al frente de sus opositores. Han comprobado que éstos ni aun con apoyo oficial se atreven a presentarse a dirimir fuerzas en un congreso unitario. En consecuencia, se ven obligados a hacer intervenir abiertamente al Ministerio de Trabajo en la interna sindical. No les importa si para conseguir sus propósitos tengan que dividir a la central obrera como antes lo hicieron con la CTA. No les importa tampoco si tienen que sellar una alianza con una burocracia en cuyas filas figuran los mismos traidores y corruptos que fueron cómplices de la flexibilización laboral bajo el menemismo y apoyaron la nueva vuelta de tuerca antiobrera que por orden del FMI aplicó De la Rúa en el 2000.

Clase trabajadora y frente nacional

En el enfrentamiento con el gobierno, Moyano se ha fortalecido políticamente, aunque ha quedado en minoría en el cuadro general de las fuerzas sindicales. Fuera de los camioneros no lo apoya ninguna organi-

zación de masas, y ha sido abandonado por una parte de la dirigencia del MTA cooptada por el gobierno. Sin embargo, por medio de sus reclamos se expresan intereses inmediatos, sentidos por el grueso de los asalariados obligados a defender posiciones ante los inevitables ajustes que han comenzado a poner en práctica los administradores del modelo.

Simultáneamente, las definiciones políticas del jefe de la CGT han comenzado a reflejar, aunque de modo parcial, la diferencia existente entre la pequeña burguesía kirchnerista y la clase trabajadora. Moyano se afirmó en el discurso histórico del peronismo y logró abrir una brecha en el plano simbólico, plano en el que se había hecho fuerte el relato épico del kirchnerismo. Sin embargo, la línea que ha seguido a medida que el enfrentamiento con el gobierno se agudizaba no puede en modo alguno suscitar un realineamiento político significativo en las filas obreras. En definitiva, cuando Moyano tuvo que traducir a términos políticos la evocación del imaginario peronista, no fue más allá de la alianza con el gobernador Scioli, ubicado a la derecha del kirchnerismo, a quien piensa apoyar en las próximas presidenciales.

Este vacío, que significa la ausencia de una alternativa política superadora, encierra el peligro de que el enfrentamiento con el gobierno termine siendo capitalizado por una oposición partidocrática cuyas ideas y programas, definitivamente conservadores y antinacionales, permanecen congelados en un tiempo anterior a la crisis de diciembre de 2001.

Los trabajadores no pueden menos que estar atentos a ese riesgo. Es cierto que tienen por delante un orden de tareas de su exclusiva injerencia: defender la unidad de clase en el plano sindical, democratizar las organizaciones y asegurar su independencia respecto del Estado, las patronales y sus partidos. Pero no es menos cierto que a la vez necesitan formular un programa (y la política correspondiente) en condiciones de delimitar estrictamente el campo nacional-popular del campo de sus enemigos; este programa debe elevarse por sobre el terreno de las demandas corporativas y, desde una fase de hegemonía, apuntar a la superación del contenido nacional burgués que impregnó las ideas y la práctica del movimiento encabezado por el general Perón a largo de tres décadas. Avanzar en esa dirección implica iniciar el camino que ha de llevar a la clase obrera a convertirse en el polo aglutinante de un amplio realineamiento de masas nacional, democrático y antiimperialista. ■

El Mercosur, en busca de otro equilibrio

El ingreso de Venezuela al Mercosur puso fin a una situación anacrónica: los golpistas del senado paraguayo, una rosca corrupta y reaccionaria vinculada al narcotráfico y el negocio sojero, se habían transformado en poder decisorio sobre el futuro del bloque regional. No fue casual que el usurpador que ocupa el lugar de Lugo, apenas consumado el golpe de Estado, declarase con la vista fija en Washington que el senado de su país no aprobaría la incorporación de los bolivarianos.

Hace ya demasiado tiempo que el Mercosur está estancado. Hasta ahora el bloque regional no ha significado mucho más que un campo de negocios y de acumulación de capital para las corporaciones monopolistas del cono sur (las instaladas en Brasil y Argentina, en primer término), un campo de alcance mucho más amplio que el de los respectivos mercados locales, limitados por acusadas desigualdades sociales.

El Mercosur es a la vez un terreno de disputa, como lo evidencian las restricciones impuestas por la Casa Rosada y el Palacio de Planalto mediante licencias previas de importación, en el marco de un horizonte recesivo en escala internacional. Esta evidencia también se hace presente en la relación desigual establecida entre los países miembros y, particularmente, en el papel dependiente al que han quedado reducidos Uruguay y Paraguay. Los límites de una integración que es guiada por los intereses de las burguesías del cono sur están rígidamente establecidos.

En estas condiciones, el ingreso de Venezuela en el Mercosur es a todas luces un avance significativo. El nacionalismo y antiimperialismo de los bolivarianos puede facilitar que el mercado común alcance otro equilibrio, uno más cercano a las aspiraciones y las necesidades de los pueblos latinoamericanos. ■

IMPUESTO A LAS “GANANCIAS”, PROGRESISMO K Y MOVIMIENTO OBRERO



Por JAIME RIVERO

La legitimidad y necesidad de las demandas cegetistas —sostenidas también por los sindicatos K e, inclusive, por la propia UIA— está fuera de discusión. Sin embargo, lo que exaspera los ánimos oficialistas son las proyecciones políticas que las críticas moyanistas asumen frente al pretendido carácter popular del kirchnerismo.

Para quien considera que tanto el valor como su derivación en forma de rentabilidad o ganancia son el resultado de la explotación de la fuerza de trabajo, el mínimo no imponible actual es insultante. La propia presidenta ha reconocido que sólo 19% de los asalariados supera los límites de 5,800 pesos para solteros y casi 8,000 para casados que implican el pago por “ganancias”. Ese solo dato permite reconocer el carácter de un gobierno que mantiene a 81% de los asalariados al borde de una canasta básica estimada alrededor de 6000 pesos, mientras se mantiene exentas de pago a una vergonzante cantidad de actividades que constituyen el núcleo duro del modelo extractivo. Aun cuando hoy el costo laboral por trabajador es 7,7% más bajo y los índices de rentabilidad sobre capital fijo son 28,2% más altos que en pleno neoliberalismo, y a pesar del brutal proceso de concentración y extranjerización del capital que se ha operado en la última década, hoy la presión tributaria sobre los trabajadores es mucho más alta: durante los años noventa pagaban ganancias 1 de cada 12 laburantes, hoy, en pleno despliegue del modelo *Nac & Pop* lo hacen 1 de cada 5. Los datos estadísticos demuestran que, mientras la inflación acumulada desde el 2007 ha alcanzado 147%, las actualizaciones del mínimo no imponible no han llegado siquiera a la mitad de esa cifra. Después de una década de capitalismo kirchnerista, casi 40% de la fuerza de trabajo permanece en la informalidad.

¿Qué curioso progresismo anima esa intención de hacer de los trabajadores responsables casi exclusivos del financiamiento del estado? ¿Por qué la intelectualidad oficial se empeña en mirar cuánto ganan los laburantes y evita pronunciarse sobre cómo le ha ido al capital en el modelo de crecimiento con inclusión? ¿Qué hay tras esa morbosa predisposición a indignarse por los altos salarios de camioneros o petroleros, mientras se calla sobre los procesos de hiperrentabilidad del capital imperialista?

Arriba y abajo, en el capitalismo, se retroalimentan. Si el capital es una relación social, todo análisis de los salarios debe contrastarse con las tasas de rentabilidad, esas “ganancias” que el oficialismo insiste en confundir con salario.

La ofensiva de la CGT moyanista ha desnudado la estratégica necesidad del kirchnerismo de someter los intereses de los sectores populares a las necesidades de financiamiento del estado semicolonial y su gerencia pequeño burguesa.

¿Cómo le fue al capital durante el modelo de la última década? Veamos qué dice el popular *Perro Verbistky* (<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-182153-2011-11-27.html>): “en las empresas de la cúpula se han obtenido rendimientos excepcionales gracias a sus costos laborales muy inferiores al incremento de la productividad, lo cual arroja un costo laboral unitario menor al del 2001”. El *Perro* ilustra esto con una gráfica que muestra datos sobre la evolución post 2001 del costo laboral unitario, índice con que los economistas relacionan productividad y costos de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué muestra el gráfico? Que a caballito de los aumentos en productividad posteriores a la crisis, y a pesar de una recuperación del costo salarial que recién en 2009 alcanzó los valores del 2001, el costo laboral unitario se ha mantenido muy por debajo de los valores de base. Durante la última década, la productividad de la cúpula ha aumentado muchísimo más que los salarios y, por lo tanto, los costos laborales unitarios se han mantenido comparativamente bajos. En buen criollo, la tasa de explotación de la fuerza de trabajo se ha más que duplicado.

En el modelo de crecimiento (capitalista y dependiente) con inclusión (parcial, selectiva y clientelar) de la tasa de rentabilidad del capital se ha más que duplicado en relación con la época del neoliberalismo, pasando de 3,5% a 8,5% entre el 2003 y el 2010. De acuerdo con los datos que ofrece los propios kirchneristas, el modelo es mucho más de crecimiento que de inclusión.

¿No podrán los muchachos de la “burguesía nacional” o el capital imperialista financiero o minero, por ejemplo, aportar los recursos necesarios para sostener a un estado que los tiene como beneficiarios prioritarios? ¿Es la propia

clase obrera la que debe financiar la inclusión del pobrero marginal que constituye su propia base?

En este contexto, el moyanismo abre una brecha de resistencia a la estrategia gubernamental de sintonía fina —ajuste, se le encare por donde se le encare—, desarticula la épica K y la extendida adjetivación “nac & pop” con que la lobotomización seisieteochesca sostiene su *Blackberry revolution* y, sobre todo, pone en evidencia los límites del publicitado modelo en un contexto en que se agota la diferencia salarial competitiva de la postconvertibilidad, se diluyen los inéditos términos de intercambio y se retraen los mercados externos.

Aun con sus inocultables limitaciones políticas e ideológicas, la resistencia del moyanismo a los intentos disciplinantes del gobierno nacional preanuncian un horizonte de creciente conflictividad social en que los sectores populares deberán articular demandas que conciban a la actual matriz fiscal como parte constitutiva de un modelo que, en una década de continuidad, ha sido incapaz de modificar el patrón productivo, cuestionar el papel subordinado de la Argentina en la división internacional del trabajo, detener la oligopolización y la fuga de capitales, reducir los abismales índices de informalidad y precariedad laboral, o detener la estructural tendencia a la concentración y extranjerización de los capitales impuesta mediante el terrorismo de estado desde hace algo más de 35 años ■

Macri reorganiza sus filas con políticos de alquiler

La derecha ha comenzado a poner en marcha su proyecto electoral con mira a las elecciones legislativas de 2013, así como a las presidenciales de 2015. Sus movimientos son fácilmente previsibles, sobre todo si se tiene en cuenta que la iniciativa la ha tomado el jefe del PRO, Mauricio Macri. Tres semanas atrás, dirigentes de esa fuerza y algunos políticos de escasa relevancia lanzaron el Grupo de Acción Política para la Unidad, rejunto que se propone meter en una misma bolsa todo lo que se pueda de la oposición al kirchnerismo. Para tener una idea precisa sobre la calidad del emprendimiento basta saber que la presentación de la nueva criatura partidocrática fue realizada por, además de Pinedo y Michetti, Eduardo Amadeo, Eduardo Mondino, Patricia Bullrich y Rafael Pascual, y que en la iniciativa participan figuras tales como Oscar Aguad, todos ellos políticos de alquiler usados hasta el desgaste por los grandes grupos corporativos y la rosca mediática.

Según la versión oficial, “es una buena señal que nos empecemos a juntar todos los que queremos trabajar por un país de diálogo, respeto y unidad”, pero uno de los inspiradores de la iniciativa tradujo el verso al lenguaje vulgar: “El armado electoral quedará para más adelante, pero hoy Mauricio es el opositor mejor posicionado.”

La cooptación de personal partidocrático en el Congreso y en los partidos se completa con las incursiones del propio Macri en la provincia de Buenos Aires, a la caza de intendentes radicales, junto con el desembarco de Michetti en el mismo territorio.

Lo importante de todo esto es que el centro (la UCR en este caso) se disgrega en disputas internas y oscila sin rumbo cierto (acuerdo con De Narváez en 2011), mientras la polarización que intenta la derecha sólo consigue dar a luz una expresión miserable, la de un pasado que se resiste a desaparecer. El futuro, en cambio, está en otra parte, tal como lo expresan las luchas de los trabajadores que no están dispuestos a volver atrás ■

Cuadernos de la Izquierda Nacional, solicitalos en:
www.izquierdanacional.org



Golpe de Estado en Paraguay: final anunciado

La destitución de Fernando Lugo constituye una farsa más de la tragedia política latinoamericana y, por cierto, nada tiene que envidiar al golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009. Basta saber que uno de los principales impulsores del juicio político fue Horacio Cartes, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Colorado y sospechoso de estar vinculado al contrabando y el narcotráfico, mientras que el jefe de la conspiración fue Aldo Zuccolillo, propietario y director de esa cloaca mediática que es ABC Color, destacado directivo de la patronal periodística denominada SIP y máximo ejecutivo del grupo del mismo nombre. Zuccolillo es el principal socio de la multinacional Cargill en Paraguay, y el grupo que preside está estrechamente vinculado a la golpista Unión de Gremios de la Producción (UGP), corporación que expresa los intereses de los agronegocios y, particularmente, de Monsanto.

Lugo cayó víctima de una conspiración en la que unieron fuerzas los partidos Colorado, Liberal, UNACE, Patria Querida (inspirada por ABC Color), el resto de la canalla mediática y la oligarquía latifundista, con el aval de la iglesia católica y la embajada estadounidense. Había perdido buena parte del apoyo popular que le permitió elevarse a la presidencia, y apenas cuatro senadores y un puñado de diputados se opusieron al ilegítimo proceso de destitución. Su gobierno no había logrado avanzar en el camino de las reformas que la anacrónica estructura social e institucional de Paraguay reclama a gritos. La gratuidad de la enseñanza pública y el subsidio a las fa-

milias pobres, no mucho más, fueron sus principales logros. No llevó adelante medidas de reforma agraria en un país donde 2% de los propietarios controla 85% de la tierra, ni modificó una regresiva estructura impositiva por la cual las multinacionales del agronegocio, al igual que los terratenientes, pagan un gravamen insignificante.

Mientras tanto Lugo, que se vio obligado a realizar sucesivas concesiones a la derecha y a la embajada estadounidense, entre otras decisiones contrarias al interés de los paraguayos dio curso a la ley antiterrorista exigida por Washington y aceptó la Iniciativa Zona Norte, por la cual tropas y civiles de Estados Unidos se instalaron en el norte la Región Oriental, colindante con Brasil, para realizar acciones de “apoyo” a los campesinos.

En Paraguay, la injerencia del imperialismo estadounidense por medio de los Cuerpos de Paz, la USAID, la NED y otras ONG es directa. La USAID controla la fiscalía, el Poder Judicial y la policía mediante convenios de cooperación.



En estas condiciones, la suerte de la presidencia de Lugo estuvo sellada desde el principio, cuando aceptó ceñirse a las reglas de la constitución partidocrática de 1992 y decidió no llamar a una asamblea constituyente para democratizar la estructura institucional, cuando resolvió no apoyar su gobierno en la movilización de las capas más empobrecidas y explotadas de la sociedad paraguaya, y cuando terminó por aceptar la persecución y el despojo de tierras practicada por los terratenientes contra los campesinos [\[5\]](#)

¿RÍO+20 O RÍO-40?

Por GUILLERMO HAMLIN

La Cumbre de la Tierra convocada por la ONU se realizó este año en Río de Janeiro (Río+20) entre los días 20 y 22 de junio, con asistencia de representantes gubernamentales. Veinte años antes, la Cumbre de la Tierra de 1992 se había celebrado ya en la misma sede. De forma paralela, desde el 13 de junio y con asistencia de organizaciones no gubernamentales, se desarrolló la denominada Cumbre de los Pueblos.

El resultado fue un fiasco, tal como lo había sido en diciembre del 2011 la Cumbre Climática en Durban, Sudáfrica. Allí se derrumbó el protocolo de Kyoto, Canadá renunció a éste y los acuerdos que se alcanzaron recién entrarían en vigencia en el año 2020. ¿No se suponía que no teníamos tiempo que perder, que cualquier demora traería consecuencias catastróficas? Desde las cumbres climáticas de Copenhague y Cancún, la ONU ha instado a adoptar la “economía verde”, que ahora sorprende y horroriza a la Cumbre de los Pueblos en Río+20.

Hace 40 años, el Club de Roma lanzó su informe *Límites del crecimiento*, efectuado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) por encargo de Aurelio Peccei, presidente del club y hombre de la Fiat y de Olivetti. La financiación estuvo a cargo de la Fundación Volkswagen de Alemania. Como se puede apreciar desde sus comienzos, en la Cumbre de la Tierra aparece el sesgo empresarial. El informe pretende darles seriedad científica a los postulados ecologistas, pero carece del rigor adecuado: todos los análisis y pronósticos catastróficos ignoran la índole histórica (es decir, perecedera y modificable) de la estructura económico-social capitalista, que aparece como una constante. No se contempla la existencia del imperialismo que es, precisamente, la parte de la humanidad que depreda y contamina.

A mediados de los años ochenta, apareció el informe *Nuestro futuro común* de



la ministra noruega Gro Brundtland, quien introduce la idea del *desarrollo sustentable*, entendiendo como tal aquel que “atiende las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan sus propias necesidades”. El “compromiso con el desarrollo sustentable” se ha puesto en práctica mediante diversos acuerdos multilaterales administrados por la ONU (protocolos de Kioto sobre el calentamiento global; de Cartagena sobre bioseguridad; de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; de Montreal sobre la capa de ozono, etcétera). Esto entraña una devaluación de la toma de decisiones local e implica una pérdida

de soberanía para los países suscriptores. Es decir, las políticas se piensan primero en el primer mundo, que domina los foros internacionales, y luego se promueven acciones en los países del tercer mundo, con la consiguiente profundización de su dependencia.

La existencia de agendas ocultas de corporaciones transnacionales que están a la pesca de nuevos negocios, así como la evidente utilización de dichos tratados como arma geopolítica por los países imperialistas, no es advertida o parece tener sin cuidado a muchos de los líderes políticos del tercer mundo, quienes participan en la formación de burocracias ambientales

en sus países, configurando con las de los países imperialistas y la propia burocracia de la ONU una burocracia ambiental internacional que emplea cuantiosos recursos en su mantenimiento, que a estas alturas depende de la difusión de la supuesta crisis ambiental para su supervivencia, y que distrae recursos escasos de los problemas verdaderamente urgentes, con lo que configura un despilfarro genocida.

Las ONG ambientalistas vieron en el concepto del desarrollo sustentable la oportunidad de incidir en las políticas ambientales, de manera que muchas comenzaron a hablar el mismo idioma que los países más industrializados, lo que las acercó a los centros del poder político y las llevó a participar en las cumbres de la tierra y en todas las convocatorias de la ONU.

Las empresas privadas promueven soluciones favorables al mundo de los negocios por medio de asociaciones con ONG, gobiernos y la ONU. En la Cumbre de Johannesburgo, en el 2002, se hicieron más de 280 asociaciones público-privadas (APP), lo que puso en evidencia el grado de cooptación de las ONG por el mundo de los negocios. Para las empresas, esto significa subcontratar la legitimidad; las ONG confieren una aprobación moral al comercio de las emisiones.

Ejemplos de APP significativos son: la Mesa de Soja Sustentable, en la cual se asociaron la conocida WWF (ONG fundada por la casa real británica, Príncipe Carlos Presidente), Unilever (inglesa), Grupo André Maggi (de Brasil y el mayor productor individual de soja del mundo) y otros; la Mesa Redonda de Palma Aceitera Sustentable, suscripta entre la WWF, Unilever, Malaysian Palm Oil Association y otros.

En la cumbre de Río 2012, a la que la Cumbre de los Pueblos señala como “fracaso”, se concretaron muchas de estas APP: entre la ONU y las ONG, 72 convenios; entre empresas, 226, y entre universidades y escuelas, 243 asociaciones. La economía verde impulsada por la ONU sigue avanzando [\[6\]](#)

Segunda temporada de la telenovela estelar México: el regreso del PRI

Por DANIEL N. MOSER

Enrique Peña Nieto, por el PRI, es el candidato que quedó en primer lugar en las elecciones presidenciales del 1° de julio. Cuando aún no se concluía el conteo de votos, en cadena nacional el titular del Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer un muestreo que lo declaraba ganador con 7% arriba de su inmediato seguidor; acto seguido, el actual presidente de la República, en la misma cadena nacional, confirmó el pronóstico, felicitó al candidato del PRI y le ofreció colaborar en la transición de un gobierno a otro. Minutos después, Enrique Peña Nieto celebraba su triunfo y anunciaba las primeras medidas de su gobierno. Pocas horas más tarde recibía llamadas de Obama y otros mandatarios de diversos países para felicitarlo.

El candidato de Televisa

Se trataba del último capítulo de la primera temporada de la telenovela de la cual es protagonista desde hace seis años, cuando la principal cadena televisora de habla hispana en el mundo, Televisa, lo lanzó al estrellato para convertirlo seis años después en el nuevo presidente de México. Fue un *déjà vu* de lo sucedido en el año 2000, cuando el régimen operó la alternancia entre el PRI y el PAN, sólo cambiaron los personajes.

Lo de la noche de este 1° de julio fue un escándalo por lo ilegal de la intervención de las principales autoridades “declarando” un ganador antes de tiempo, pues para confirmar un presidente aún falta cubrir varios procesos legales que incluyen la atención de denuncias e impugnaciones y la calificación de la elección. No fue un accidente ni una improvisación.

Al día siguiente, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien quedó finalmente a 6 puntos de Enrique Peña Nieto, denunció la enorme inequidad de la contienda, una serie de irregularidades el día de la elección y la superación del tope de gastos de campaña en más de ¡380 millones de dólares de origen ilícito por parte del PRI!, utilizados para coacción y compra de votos; también anunció que impugnaría la elección. Inmediatamente, la prensa y la partidocracia se le fueron encima, acusándolo de no saber perder. Curioso: a él, que recurría a los mecanismos legales previstos por la ley, lo crucificaban, y nada dijeron



de quienes la habían infringido ungiendo al candidato del PRI como nuevo presidente.

Democracia y neoliberalismo

En México existe un régimen plutocrático que ha copado el Estado mediante un sistema partidocrático que simula ejercer una democracia que ni en su vacía formalidad logra consolidarse: la democracia real es aún una utopía.

El nuevo paradigma mundial del neoliberalismo, impulsado desde el centro del sistema capitalista mundial para consumo de los países de la periferia, fue impuesto en 1982 en México. Dicho paradigma se consolidó con Carlos Salinas, quien formalizó la instauración del régimen plutocrático; Ernesto Zedillo tuvo la tarea de darle continuidad, y con Vicente Fox se pretendió disfrazarlo de democrático con el supuesto “cambio”. Pero el sistema partidocrático ya estaba consolidado y, como luego fue evidente, Vicente Fox vino a garantizar la permanencia del régimen. Felipe Calderón asumió el poder con la misma consigna, pero a diferencia de Vicente Fox, quien se alzó con una clara victoria electoral con cerca de 6% de ventaja, Felipe Calderón obtuvo un triunfo pírrico con un cuestionado 0.58% a su favor.

Los resultados de las políticas que cumplen con el paradigma neoliberal están a la vista. Si logramos abstraernos de la propaganda y los lugares comunes, podemos observar que a lo largo de los últimos 30 años ha gobernado el mismo régimen con el mismo sistema, para garantizar el cumplimiento del paradigma neoliberal instaurado en 1982.

En los últimos 30 años, durante los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, cada una de las medidas y políticas cruciales para cumplir con el paradigma contaron con el imprescindible y firme respaldo de la oposición (del PAN y del PRI según los casos). Escasamente y sin mayor trascendencia, con la del PRD y alguno de los partidos satélites y franquicias familiares. Sería tedioso enumerar aquí la larga lista de hechos que confirman el contubernio; por ello recurro a la memoria y al gusto de los lectores por hurgar en la historia.

Medios y encuestas

Dos de los principales instrumentos en la reciente campaña electoral, los medios masivos de comunicación —con la televisión en primer lugar— y las encuestas, han sido fuertemente cuestionados por amplios sectores sociales.

En el caso de los medios masivos de comunicación, ha resultado muy evidente que, lejos de responder a criterios de interés público como la objetividad y la pluralidad informativa, responden a los intereses de sus propietarios: los integrantes de la plutocracia. Existe un libertinaje de empresa en detrimento del derecho a la información. Buscando responder a este cuestionamiento, un alto directivo de la televisora con mayor alcance nacional señaló que ésta había dedicado

proporcionalmente más tiempo aire al candidato que la cuestiona que al que se supone que la televisora promueve; lo que no dijo el directivo es la relación de información-opinión positiva y negativa que difunde en el caso de cada uno de los candidatos aludidos.

En otra proporción, con las encuestas sucede algo similar: no cumplen con el objetivo de informar sobre las preferencias ciudadanas con la “fotografía” del momento en que se realizan. En promedio, daban al candidato del PRI entre 15 y 18 puntos de ventaja sobre el de la izquierda; finalmente, con todo y la compra de votos, la diferencia no llegó a 7. Fallaron por “apenas” 3 millones de votos.

El impacto del YoSoy132

El impacto de la movilización social, particularmente el generado por el movimiento estudiantil YoSoy132, es muy importante. Reúne a representantes estudiantiles de más de 150 universidades públicas y privadas. Su trascendencia en términos electorales es difícil de cuantificar, pero en términos políticos ha sido relevante. Sigue vivo y pretende continuar su lucha contra el sistema después del proceso electoral. Su principal canal de difusión son las redes sociales, cualitativamente importantes pero cuantitativamente irrelevantes en términos electorales, pues menos de 20% de la población accede regularmente a ellas. En contraste, según

micos —de origen legal y delincencial— fuera de control (en compra y coacción del voto, por ejemplo) sigue siendo un factor determinante en el resultado, particularmente cuando la diferencia entre los candidatos no es sustantiva.

La ley electoral ha evolucionado para ofrecer mayor certeza al proceso electoral, pero el IFE de ninguna manera puede transformarse en garante de la muy precaria democracia formal, de hecho, como se demostró en estas elecciones, se mostró permisivo con los abusos cometidos durante todo el proceso. El que garantiza —en su beneficio— la formalidad democrática es el régimen plutocrático, y cuenta para ello con sus dos instrumentos fundamentales: la televisión y la partidocracia.

La inequidad

Los votos seguramente se contaron bien, y difícilmente se puede hablar de fraude en sentido estricto, lo que sí es un hecho es la inequidad en la campaña; la coacción y compra de votos, difícil de probar.

Es casi imposible que logre revertirse el triunfo de Enrique Peña Nieto, aunque el intento se hará. Con él nuevamente como protagonista comenzaría la segunda temporada de la telenovela estelar, mediante la cual se pretende institucionalizar a México como el patio trasero de EU. El plan para llevarlo a la presidencia fue muy elaborado y cumplido a la perfección.

El despertar de conciencias por medio de miles de organizaciones ciudadanas y de



una encuesta realizada por la empresa Parametría, más de 80% de los consultados tiene una opinión positiva sobre la programación de la televisión abierta, donde destacan abrumadoramente Televisa y TV Azteca, lo cual parece confirmar que la credibilidad de las televisoras —y por ende su capacidad de influir en la opinión de decenas de millones de televidentes— es importante.

Las posibilidades de fraude en el proceso electoral se han reducido notablemente como resultado de los ajustes en la legislación y los procedimientos, pero el impacto del uso indiscriminado de recursos econó-

sectores juveniles, particularmente durante este proceso electoral, es sin duda un fenómeno esperanzador. De la consistencia y constancia de estos esfuerzos dependerá que se pueda enfrentar con algún éxito al aparato de adormecimiento de las conciencias que durante décadas ha consolidado el sistema educativo y los medios masivos de comunicación, con la televisión como factor determinante **■**

Nuevo cuaderno de la Izquierda Nacional, solicítalo en: www.izquierdanacional.org

KIRCHNERISMO
Debate sobre su naturaleza, sus límites, posibilidades e intenciones

Los resultados del pasado 23 de octubre de 2011 abrieron paso al tercer gobierno del ciclo kirchnerista. El agitado resultado que arrojó el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición tiene un significado inequívoco: los trabajadores, las masas populares e, incluso, la pequeña burguesía democrática no están dispuestos a retroceder en las posiciones conquistadas durante la crisis de diciembre de 2001, demás de esas posiciones quedó la peor de la partidocracia, signada en una oposición marcadamente antebesa y antinacional. Entre votar por Alfonsín, Duhalde, Carrió, Rodríguez Saá, De Narváez o Binzer, o por los candidatos del oficialismo, una clara mayoría no tuvo dudas. Sin embargo, los once millones de argentinos que dieron su apoyo al Frente para la Victoria y sus aliados votaron por el “mal menor” o se inclinaron por un emergente movimiento nacional-popular, como asientan los partidarios del gobierno? En un interesante coloquio de mensajes, compañeros de la Izquierda Nacional debatieron el tema.

8 www.izquierdanacional.org